

Santiago, dos de julio de dos mil veintiuno.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que en el procedimiento ordinario seguido ante el Segundo Juzgado de Letras de San Bernardo, bajo el Rol C-4767-2018 y caratulado “Vargas con Inrekar S.A”, se ha ordenado dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido por la parte demandada en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel el treinta de noviembre de dos mil veinte, que confirmó la de primer grado de dos de junio de dos mil veinte, por la que se acogió la demanda de indemnización de perjuicios.

Segundo: Que la recurrente funda su solicitud de nulidad en la infracción de los artículos 1576, 1679, 1801, 1698, 1708, 1709 del Código Civil en relación con los artículos 328 y 329 del Código de Comercio. Al efecto, asegura que el tribunal altera la carga de la prueba por cuanto exige a la demandada la acreditación del hecho negativo consistente en que el contrato de compraventa no existió. Agrega que se tuvo por acreditada la existencia del contrato con la prueba testifical rendida por el actor, en circunstancias que se trata de una obligación que supera las dos unidades tributarias mensuales. Finalmente, alega que los artículos 328 y 329 del Código de Comercio no son aplicables en la especie, pues no fueron invocados por el demandante como sustento de su acción.

Tercero: Que la sentencia que se revisa, consigna en su motivo segundo que del examen de la totalidad de la prueba rendida es posible tener por acreditada la existencia del contrato de compraventa cuyo incumplimiento se reclama. El tribunal de alzada concluye que ha sido la propia demandada quien reconoció la forma de operar de la empresa y las obligaciones que contrajo el vendedor, que en ese momento prestaba servicios para ella y que actuaba en su representación.



Cuarto: Que del examen del recurso en revisión se advierte que si bien se denuncia infracción de normas sustantivas, los argumentos principales se dirigen a desvirtuar los hechos que han sido asentados por los sentenciadores y, al efecto, es pertinente recordar que solamente los jueces del fondo se encuentran facultados para fijar los hechos de la causa, de manera que efectuada correctamente esta labor en atención al mérito de las probanzas aportadas, resultan ser inamovibles conforme a lo prescrito en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil. Su revisión no es posible por la vía de la nulidad, salvo que se haya denunciado de modo eficaz la vulneración de las leyes reguladoras de la prueba, lo que en la especie no ha acontecido.

En efecto, no se configura la infracción del artículo 1698 del Código Civil pues esta regla se infringe cuando la sentencia obliga a una de las partes a probar un hecho que corresponde acreditar a su contraparte, esto es, si se altera el *onus probandi* y, en la especie, acreditada la existencia de la obligación, la parte demandada no rindió prueba idónea a fin de probar su cumplimiento. Luego, tampoco se advierte contravención de los artículos 1708 y 1709 del Código Civil y para ello basta con remitirse al considerando décimo sexto del fallo de primera instancia, donde se advierte la existencia del documento denominado “cierre de negocio”, principio de prueba por escrito para efectos de la contravención que se reclama. Luego, mención aparte merece la denuncia de infracción de los artículos 329 y 329 del Código de Comercio, argumento que también pretende desvirtuar un hecho no controvertido por las partes, cual es, la calidad de comerciante de la demandada y de factor de comercio de quien intervino en el denominado cierre de negocio.

Quinto: Que, así entonces, lo que el tenor del recurso deja en evidencia, es que las argumentaciones medulares que en él se contienen en



cuanto a la infracción de normas sustantivas, se construyen sobre la base de la impugnación de la valoración que de las probanzas rendidas hicieron los jueces del mérito y de esa forma pretende obtener, por esta vía, una nueva ponderación de los mismos para asentar hechos útiles a los propósitos de su defensa. Tal pretensión escapa a los márgenes de este recurso, pues el tribunal –en uso de sus facultades privativas– calificó de suficiente la prueba para establecer los supuestos necesarios para acoger la demanda.

Sexto: Que, en consecuencia, el recurso no podrá prosperar por adolecer de manifiesta falta de fundamento.

Y de conformidad además con lo dispuesto en los artículos 772 y 782 del Código de Procedimiento Civil, **se rechaza el recurso de casación en el fondo** interpuesto por el abogado José Ignacio Arteaga Manieu, en representación de la parte demandada, en contra la sentencia de treinta de noviembre de dos mil veinte.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Rol N° 150.608-2020.-

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema por los Ministros Sra. Rosa Egnem S., Sr. Juan Eduardo Fuentes B., Sr. Arturo Prado P., Sr. Mauricio Silva C., y la Ministra Suplente Sra. Dobra Lusic N. No firma la Ministra Suplente Sra. Lusic, no obstante haber concurrido al acuerdo del fallo, por haber terminado su periodo de suplencia. Santiago, dos de julio de dos mil veintiuno.





En Santiago, a dos de julio de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

